

C.A. de Santiago

Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

En estos autos RUC 2000175446-8, RIT 158-2022, del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de veintiocho de junio del año en curso, en lo que interesa al recurso, se resolvió:

“VII.- Se CONDENA a **ALFONSO ALBERTO GODOY GONZÁLEZ** en calidad de autor de los delitos de tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes y de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes, cometidos entre los meses de diciembre de 2019 y octubre de 2020, a las siguientes penas:

a) Por el delito de tráfico ilícito de drogas se le impone la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO y a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más el pago de una multa de 200 U.T.M. que podrá pagar en 10 parcialidades de 20 U.T.M. cada una, sin costas.

b) Por el delito de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de drogas, del artículo 16 N°1 de la Ley 20.000 se le impone la pena de DIEZ (10) AÑOS Y UN (1) DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, y a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de



inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, sin costas.

VIII.- Se CONDENA a **MÓNICA DE LOURDES SOTO MALIG** en calidad de autora de los delitos de tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes y de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes, cometidos entre los meses de diciembre de 2019 y octubre de 2020, a las siguientes penas:

a) Por el delito de tráfico de drogas se le impone la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO y a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más el pago de una multa de 200 U.T.M. que podrá pagar en 10 parcialidades de 20 U.T.M. cada una, sin costas.

b) Por el delito de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de drogas, del artículo 16 N° 1 de la Ley 20.000 se le impone la pena de DIEZ (10) AÑOS Y UN (1) DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, y a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, sin costas.

IX.- Se CONDENA a **GERMÁN ALFREDO SOTO MALIG** en calidad de autor de los delitos de tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes y asociación ilícita para cometer el delito de tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes, a las siguientes penas:

a) Por el delito de tráfico de drogas, se le impone la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO



MÁXIMO y la pena accesorio de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 100 U.T.M. en 10 cuotas iguales y sucesivas de 10 U.T.M. cada una, sin costas.

b) Por el delito de asociación ilícita del artículo 16 N° 2, se le impone la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO y la pena accesorio de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.”

En contra de esta decisión, las defensas de los condenados dedujeron sendos recursos de nulidad.

En representación del acusado **Alfonso Alberto Godoy González**, deduce recurso de nulidad su abogada Natalia Sepúlveda Valdebenito, fundado en las causales previstas en el artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 letra c) y d), conjuntamente a la del artículo 373 letra b), todas del Código Procesal Penal.

A su vez, el abogado Daniel Cisternas Pozo, interpone recuso de nulidad en representación de la condenada **Mónica de Lourdes Soto Malig**, alegando como causa principal de nulidad la prevista en la letra e) del artículo 374, en relación con el artículo 342 letras c) y d) del Código Procesal Penal y, de forma subsidiaria, invoca el motivo de nulidad del artículo 373 letra b) del mismo cuerpo normativo.

En tanto, el abogado Ignacio Moya Guzmán, defensor del sentenciado **Germán Alfredo Soto Malig**, sustenta su recurso en tres causales que interpone una en subsidio de la otra; la principal es la del artículo 374 e), en relación con el artículo 342 letra c) y artículo 297, todos del Código Procesal Penal; en subsidio, invoca la prevista



en el artículo 374 letra f), por infracción al principio de congruencia; y, en subsidio de las anteriores, esgrime el motivo de nulidad del artículo 373 letra b), del referido Código.

Celebrada la audiencia para conocer de los recursos el día 1 de agosto de 2023, comparecieron a estrados los abogados defensores de los acusados, quienes alegaron a favor de sus respectivos arbitrios y también el representante del Ministerio Público, quien alegó en contra.

### **OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:**

#### **I. Del recurso de nulidad de la defensa de Alfonso Godoy González.**

**PRIMERO:** Que el recurso entablado a favor de Alfonso Godoy González postula como primer motivo de nulidad la causal prevista en el artículo 374 letra e), en relación al artículo 342 letra c) y d), del Código Procesal Penal por cuanto en la sentencia condenatoria se ha omitido uno de sus requisitos fundamentales que es la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, así como la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo cuerpo legal; y las razones legales o doctrinales que sirven para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y circunstancias para fundar el fallo. Ello en relación con la condena a su representado y coimputados por el delito contemplado en el artículo 16 N° 1 de la ley 20.000, por formar parte de una asociación ilícita para traficar drogas. Estima que toda la fundamentación de los considerandos décimo y undécimo del fallo, en los cuales el tribunal se pronuncia sobre el delito referido, es vaga, sin expresión de elementos legales y/o doctrinales que la sustenten.

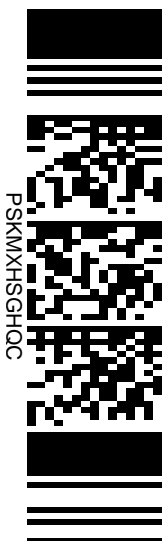


Pide que se acoja este motivo de nulidad, se anule el juicio y la sentencia, y se retrotraiga el procedimiento al estado de celebrarse un nuevo juicio oral por un tribunal no inhabilitado.

Además, junto a la causal anterior, invoca como segundo motivo de nulidad el previsto en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en cuanto se condenó a su representado al delito previsto y sancionado en el artículo 16 número 1 de la ley 20.000, esto es, formar parte de una asociación ilícita para traficar drogas. Tras efectuar un análisis pormenorizado de los elementos del tipo penal, refiere que hay consideraciones que no fueron debidamente desarrolladas, explicadas o consideradas por el sentenciador y que fueron alegadas por la defensa y no resueltas en el fallo recurrido, para lo cual cita los respectivos considerandos. Además, reitera los requisitos que deben concurrir para la comisión del delito, citando doctrina y jurisprudencia sobre la materia.

En virtud de esta causal, solicita se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo, acogiendo sus peticiones, esto es, descartando el delito de asociación ilícita y absolviendo a su parte, modificando el fallo recurrido.

**SEGUNDO:** Que el recurso de nulidad reglado en el estatuto procesal penal es de derecho estricto, ha sido instituido para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del veredicto, abriendo paso a una excepcionalísima decisión de reemplazo.



**TERCERO:** Que el recurso en análisis adolece de una deficiencia formal evidente, toda vez que parte señalando que *“interpone el recurso por las causales o motivos que se pasan a enunciar, la primera que dice relación con la contenida en el artículo 374 letra e) y la segunda contenida en el artículo 373 letra b) ambas del mismo código en comento, de manera conjunta”*.

Más adelante, en las peticiones concretas, pide se declare la nulidad del juicio oral y de la sentencia recaída en atención a que se esgrimen los dos motivos de nulidad, ya referidos.

Finalmente, en el petitorio del recurso, pide a esta Corte que *“lo acoja por algunas de la causales de nulidad invocadas de manera conjunta, invalide el juicio y la sentencia recurrida respecto de los delitos por los cuales fue condenado ALFONSO GODOY GONZALEZ y proceda a determinar el estado en hubiere de quedar el procedimiento.”*

**CUARTO:** Que resulta evidente que las causales invocadas por la recurrente no pueden ser deducidas en forma conjunta, por cuanto son absolutamente incompatibles, desde que la primera, cuestiona la existencia del hecho punible, mediante la impugnación de la valoración de la prueba que el tribunal realizó, en tanto que la segunda importa aceptar los hechos tal como han sido establecidos, sin cuestionar su construcción ni razonamientos valorativos, por lo que el reproche sólo puede relacionarse con aspectos de derecho.

**QUINTO:** Que, a mayor abundamiento, por expresa disposición del artículo 378 del estatuto procesal penal, el libelo de nulidad debe contener peticiones concretas. Esta exigencia formal debe ser coherente con la causal de nulidad invocada y por ello el recurrente debe solicitar concretamente, en conformidad a los fundamentos que



esgrime, la invalidación de la sentencia o de ésta junto al procedimiento.

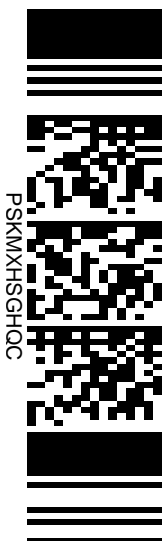
**SEXTO:** Que, como se ha venido diciendo, el arbitrio en estudio contiene defectos formales en su interposición, lo que atenta contra su naturaleza de derecho estricto, desde que sin perjuicio de que precisa las infracciones que reclama, carece de fundamentos definidos e inequívocos, lo que no es aceptado por el ordenamiento procesal vigente, por cuanto es obligación del recurrente precisar la causal que alega y cumplir las exigencias previstas en los artículos 372, y 378 del Código Procesal Penal, razones por las cuales debe ser rechazado.

II. **Del recurso de nulidad de la defensa de Mónica Soto Malig.**

**SÉPTIMO:** Que, como se aludió en lo expositivo de este fallo, la defensa de la condenada Mónica Soto aduce como **causa principal del recurso la del artículo 374 letra e)**, en relación con el artículo 342 letras c y d, del Código procesal penal.

Para fundar este motivo de nulidad, en primer lugar, transcribe el considerando décimo del fallo recurrido, que se refiere a la valoración de la prueba con relación al delito de tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes y asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de drogas, para luego precisar que lo que cuestiona son las consideraciones por las cuales el tribunal arriba a la convicción de que se dan los presupuestos para tener por acreditado el delito de asociación ilícita respecto a su representada.

Señala que lo sostenido por su defensa es que sí hubo operaciones con la finalidad de enviar droga e instalarla en un destino determinado, que para lograrlo necesariamente hubo gestiones de coordinación que son necesarias para desarrollar la actividad que se

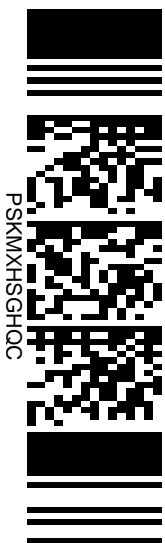


pretende, siendo desproporcionado que estas coordinaciones den origen a los elementos del tipo penal de asociación ilícita.

Luego, hace referencia al considerando duodécimo de la sentencia el cual se refiere a la participación de su representada por los delitos por los que fue condenada y afirma que no se encuentran debida y completamente fundadas las argumentaciones de los sentenciadores, que se limitan a puntualizar dos hechos en los cuales su representada y su pareja gestionan el poder poner los libros de cocina impregnados con cocaína en la respectiva sucursal de correos. Sin embargo, se basan en meras deducciones por las propias escuchas telefónicas que daban cuenta de aquellos actos puntuales llevados a cabo por la pareja, con ello no se cumple con la obligación que impone el artículo 342 letra D del Código Procesal Penal, no sustentando su decisión en base a doctrina o razones legales para calificar jurídicamente cada uno de los hechos.

Indica que todos los hechos y la prueba aportada por el Ministerio Público apuntó más bien a tener por acreditado el delito de tráfico de drogas y que, con relación a la asociación ilícita, la defensa estima que no lograron acreditarse aquellos elementos que la configurarían. En particular, dice que el tribunal omite precisar sus fundamentos y se forma una convicción en base a escuchas, sin embargo, no se hizo cargo de las alegaciones que hizo en orden a que no existieron escuchas en las que su representada recibiera o impartiera instrucciones a otros, lo que estima es un elemento fundamental para señalar que existe asociación ilícita.

Agrega que existe otro elemento a considerar, de carácter subjetivo, que es la conciencia de pertenecer a esta asociación con el ánimo de pertenecer a ella. Señala que estos elementos tampoco





fueron acreditados, y en la sentencia no se expresa del todo lo que consideraron los sentenciadores para formarse la convicción de que este elemento concurría. Afirma que las operaciones llevadas a cabo por los tres condenados en esta causa requirieron necesariamente coordinación y comunicación, sin embargo, jamás tuvieron sentido de pertenencia a nada. Menciona que no se sabe cómo se comunicó su representada con Joan Ramos, quien abastecía de la droga que luego su representada y su pareja colocaban en servicios de encomienda, y que esto es crucial para la defensa, ya que no era posible que dentro de esta supuesta agrupación hubiera dos centros de poder: su defendida y Godoy González, mientras también se menciona en la cúspide a Joan Ramos Borges. Por ello cuestiona la falta fundamentación del tribunal, pues podrían cumplirse los elementos típicos del artículo 16 numeral 2 de la ley 20.000, incluso sería posible sostener que se encuentra en la hipótesis de agravante del artículo 19 letra A de la ley 20.000.

Como petición concreta de la causal pide se anule el juicio y la sentencia respecto del delito de asociación ilícita por el cual fue condenada su representada, se determine el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y se ordene la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral.

**OCTAVO:** Que, el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”*.



Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*.

A su turno, el artículo 297 del citado estatuto legal expresa: *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.*

*El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.*

*La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”*.

**NOVENO:** Que, como reiteradamente ha señalado la Excelentísima Corte Suprema, toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener

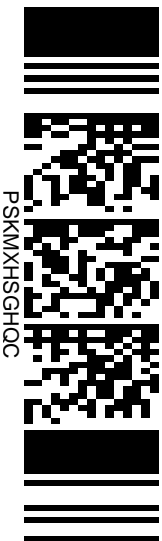


algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral.

Además, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieran por probadas, favorables o desfavorables a los acusados, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del Código Procesal Penal. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, únicos o plurales, por los cuales se dieran por probados los hechos y circunstancias atinentes a la litis.

**DÉCIMO:** Que, tal exigencia de fundamentación ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones a partir de un análisis valorativo de cada uno de los elementos de la prueba incorporada al juicio, resultado de una evaluación de cada uno de los elementos probatorios presentados, en relación con los hechos que constituyen el tipo de asociación ilícita para traficar, como en lo concerniente a las acciones llevadas a cabo por los acusados.

En estas circunstancias, no es posible considerar que el fallo impugnado carezca de coherencia y comprensión, como establece el artículo 342 del Código Procesal Penal. La sentencia proporciona las bases que sustentan la conclusión alcanzada en relación con el delito investigado, basada en un análisis detenido y conjunto de las pruebas presentadas. Esto se desprende de la lectura de los argumentos expuestos en el fallo. Estas consideraciones conducen a una conclusión inequívoca, tal como se expresa en la sentencia, cuya interpretación está respaldada por los razonamientos que se detallan en ella. Estos argumentos no han sido refutados por el recurso

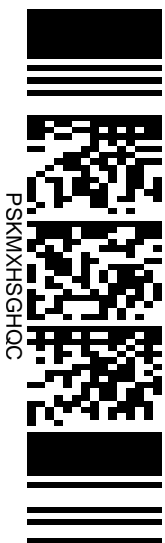


presentado, por lo que solo se puede concluir que la objeción presentada por la defensa se trata de una simple discrepancia con las conclusiones relacionadas con la responsabilidad penal del acusado. Esta evaluación, como se evidencia en el motivo décimo al valorar la prueba con relación al delito de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de drogas, fue adecuadamente fundamentada por el tribunal. Además, se refiere a ello el considerando undécimo al efectuar la calificación jurídica de los hechos y en el duodécimo al establecer la participación de Alfonso Godoy y Mónica Soto. Por lo tanto, la alegación de una supuesta deficiencia en el razonamiento no será aceptada.

**UNDÉCIMO:** Como segunda causal de nulidad, en subsidio de la anterior, invoca la prevista en el **artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, por cuanto en el pronunciamiento de la sentencia se hizo una errónea aplicación del derecho, en cuanto el tribunal decidió condenar a su representado al delito previsto y sancionado en el artículo 16 N° 1 de la ley 20.000, por formar parte de una asociación ilícita para traficar drogas.

Luego de referirse latamente al tipo penal y los elementos que lo configuran, hace presente la necesidad de hacer algunas observaciones a los requisitos establecidos como concurrentes para la comisión de este delito, a saber:

Jerarquía: la que identifica como una estructura con subordinación entre las personas que la integran, y dice que entiende que no se da en este caso, por cuanto no puede haber jerarquía en las relaciones familiares o de amistad, y su representada era pareja sentimental Godoy González y hermana de Germán Soto, y, de la prueba incorporada no quedó nunca claro que se diesen órdenes



entre ellos o a terceros, es decir, no había relación de jerarquía, sino que era una relación familiar.

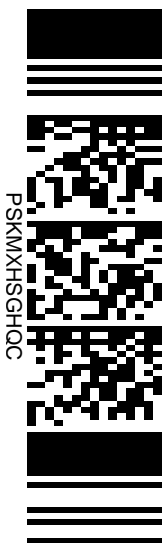
**Permanencia:** Refiere que el tribunal a quo dice en su sentencia que no se trata de un asunto transitorio o de una sola transacción, lo que refuta, dice que esto no se condice con la definición de permanencia en el tiempo y no se entiende por qué la subsume en asociación y no en la agravante del 19 letra a).

**Organización del plan:** Señala que la organización dice relación con la elaboración del plan delictivo, que se identifica con la coparticipación en la comisión del hecho delictivo, que debe analizarse a la luz de las características propias de delito en cuestión, y este es un delito típico de emprendimiento que requiere la coparticipación de más de dos personas, que requiere de elaboración y desarrollo del plan, así como de la comisión de cualquier delito que requiere diversas etapas de desarrollo, por lo que llevar este desarrollo a una etapa superior como pretende el ente persecutor y el tribunal es equivocar lo que han señalado la doctrina y jurisprudencia que cita.

**Finalidad:** Indica que subsumir *per se* los tráficos incautados en asociación carecen de fundamento desde que los requisitos jerarquía y organización no concurren en la especie.

Como petición concreta de este motivo de nulidad, pide que se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo que acoja sus peticiones, descartando el delito de asociación ilícita y absolviendo en esa parte, modificando el fallo recurrido.

**DUODÉCIMO:** Que la causal invocada es la letra b) del artículo 373, la que señala que procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia *“cuando, en el pronunciamiento de la sentencia,*



*se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.*

Dicha hipótesis resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia, lo que puede tener lugar en los casos de contravención formal de la ley -aquéllos en que la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso-; en los de errónea interpretación de la ley -cuando la sentencia da al precepto legal un sentido o alcance distinto a aquel que debió haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación; y si existiere una falsa aplicación de la ley -defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado-, siempre que cualquiera de estas hipótesis que se presente influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En esas condiciones, en el caso que el recurso de nulidad se funde en esta causal genérica podrá invalidarse sólo la sentencia y ello ocurrirá únicamente si el motivo no se refiere a formalidades del juicio, ni a los hechos o circunstancias que se hubieren dado por probados, sino que se debiere, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 385 del Código Procesal Penal, a que el fallo califique de delito un hecho que la ley no considere tal; que se aplique una pena y no procediere aplicar sanción alguna y que se imponga una pena superior a la que legalmente corresponda.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, de acuerdo con la conceptualización de la causal propuesta, aquello susceptible de revisión por esta vía es la errónea aplicación del derecho, por lo que los hechos que soportan tal calificación son inamovibles para este tribunal.



Asimismo, tal errónea aplicación del derecho ha de tener el efecto ya descrito – influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia- exigencia que se traduce en la necesidad de demostrar que ha tenido un efecto trascendente y concreto, de suerte que su verificación implique una real variación respecto de lo que racional y jurídicamente debería fallarse y lo que efectivamente se resolvió en la resolución impugnada, de manera tal que la declaración de una nulidad que, en definitiva, no ha de repercutir sobre la sentencia atacada carece de todo interés jurídico, atenta contra la economía procesal y como pronunciamiento abstracto es ajeno a la función jurisdiccional de este tribunal.

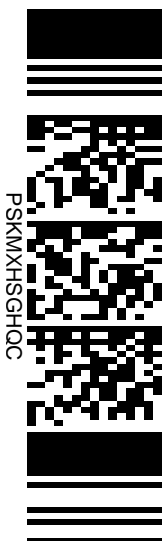
**DÉCIMO CUARTO:** Que, para analizar las impugnaciones, resulta necesario tener en cuenta los hechos asentados por el tribunal a quo en el considerando décimo, específicamente con relación a los reproches del recurrente respecto de la no concurrencia de los requisitos del tipo penal, que son los siguientes:

*“Desde diciembre del año 2019, en coordinación con la Fiscalía Local de Pudahuel, la Policía de Investigaciones de Chile y Aduana de Chile, detectaron la existencia de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, especialmente mediante envíos a Europa, Oceanía y el sur de Chile, que esta organización estaría compuesta por varias personas los que se distribuirían en las siguientes funciones:*

*Líderes:*

*Alfonso Alberto GODOY GONZALEZ y MÓNICA DE LOURDES SOTO MALIG pareja sentimental, quienes estarían encargados de coordinar los envíos y conseguir la droga.*

*Agente de comercio:*



*Joan Martín RAMOS BORGES, contacto en el extranjero, tanto para la adquisición y venta de la droga, además recibe los pagos desde el extranjero y administra dineros, funcionando como un agente de esta organización.*

*Brazos operativos:*

*Germán SOTO MALIG, es la persona que se encarga de realizar la documentación falsa para enviar la droga y así no ser detectados.*

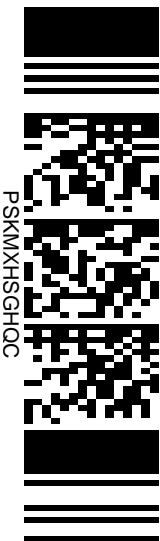
*Giovanni ZAPATA GONZALEZ, apodado como ingeniero o gerente, quien se encarga de abultar y ocultar la droga, cocinándola.*

*Esta organización con el objeto de ocultar o disimular el origen ilícito de los dividendos dados por la importación, exportación, envió y venta de la droga, mantendría sujetos que harían las veces de testaferros como Rocío GAJARDO Soto, hija de Mónica SOTO MALIG, quien participó retirando dinero del extranjero, para financiar pagos y operaciones de envío de droga.*

*Esta organización se mantuvo operando por al menos dos años, en los cuales se lograron detectar cinco envíos de droga, de los cuales cuatro fueron despachados con destino a Europa y otro a Punta Arenas en el sur de Chile.*

*1. El 19 de diciembre de 2019, se detectó e incautó cocaína en estado líquido, contenida al interior de una pieza metálica, que estaba siendo enviada a través de la empresa DHL hacia Bélgica, con un peso bruto total de 15.260 gramos, droga enviada por Alfonso Alberto GODOY GONZALEZ y MÓNICA DE LOURDES SOTO MALIG.*

*2. El 04 de mayo de 2020, se incautaron 2.306,63 gramos de clorhidrato de cocaína, la que se encontraba oculta al interior de un cilindro hidráulico que había sido enviado desde Santiago a Punta*





*Arenas, por parte de Alfonso Godoy González, a través de la empresa de encomiendas Starken,*

*3. El 06 de octubre de 2020, Mónica SOTO MALIG, realizó la entrega de una encomienda en dependencias de Correos de Chile, sucursal Alto Hospicio, I Región, con destino a BÉLGICA, que contenía en su interior dos libros de cocina internacional, impregnados con clorhidrato de cocaína, con un peso bruto total de 1998,19 gramos.*

*4. El 07 de octubre de 2020, Alfonso GODOY GONZALEZ, realizó la entrega de una encomienda en dependencias de Correos de Chile, sucursal Pozo Almonte, I Región, con destino a BÉLGICA, que contenía en su interior, dos libros de cocina internacional, impregnados con clorhidrato de cocaína, con un peso bruto total de 2024,95 gramos.*

*5. El 09 de octubre de 2020, Mónica SOTO MALIG, realizó la entrega de una encomienda en dependencias de Correos de Chile, sucursal Alto Hospicio, I Región, con destino a HOLANDA, que contenía en su interior dos libros de cocina internacional, impregnados con clorhidrato de cocaína, con un peso bruto total de 2085,31 gramos.” (página 123)*

Además, existen varios pasajes en los que el fallo que establecen hechos contrarios a los que alega la recurrente en relación a la no acreditación de los elementos propios del delito de asociación ilícita previamente reseñados, como cuando dice:

*“Ahora, todo lo que se ha descrito requiere una organización y una distribución de funciones, en términos que Alfonso y Mónica dirigían, Germán ayudaba con la logística, Giovanni cocinaba, Rocío prestaba su nombre para recibir dinero, y Joan mandaba la droga*



*desde afuera probablemente y también puede que haya gestionado a los receptores de la droga en el extranjero, porque alguien tenía que hacer esa labor”. (página 127)*

*“Ahora, independiente que una organización dedicada al tráfico de drogas no puede tener una escritura social con cargos asignados y que las denominaciones que ellos se daban no tenían un respaldo jurídico como lo tendría una sociedad legalmente constituida, de todas formas evidenciaba una distribución de funciones y cierta jerarquía entre ellos, puesto que Giovanni en una oportunidad le pide literalmente permiso a Alfonso para hacer alguna movida para otras personas, a lo que Alfonso le dice que puede hacerlo, que lo haga no más y Giovanni le agradece el permiso”. (página 132)*

*“... Pues se trata de una multiplicidad de elementos aptos para hacer fe, como lo es una conversación de los propios imputados y las fotografías y videos que demuestran que lo relatado es efectivo, sin dejar lugar para dudas sobre la comisión de los ilícitos de tráfico de drogas y de asociación ilícita para cometer justamente el delito de tráfico de drogas”. (página 142)*

*“Esta asociación, esta organización, se dedicaba a intermediar droga, a recibirla, almacenarla y enviarla desde Chile a distintos destinos locales e internacionales, de modo que han quedado sobradamente acreditados los dos delitos, como ya se ha dicho, con la prueba de cargo del Ministerio Público que demostró la ocurrencia de éstos, prueba que pudo ser constatada, pesada, medida, y patentizó lo que se ha relatado sin dudas, cumpliendo con el estándar del artículo 3 del Código Procesal Penal”. (página 145)*

En el considerando undécimo, referente a la calificación jurídica del delito de asociación ilícita para traficar, establece lo que sigue:



*“En lo referente a la asociación ilícita, no se trata de cualquier tipo penal, sino del que está contenido en la Ley N° que tiene diferencias con la “asociación ilícita del Código Penal” y que debe analizarse a la luz de las normas especiales y a la dinámica como ocurren los hechos en un mundo que está cada vez más tecnologizado por lo que nos pone desafíos de estar en constante actualización de la evolución que sufre el crimen, en cosas tan simples como las comunicaciones, que no pueden restringirse solo a las telefónicas, cuando existe una multiplicidad de aplicaciones que permiten una fluida comunicación e incluso conversación, usando para ello internet y no el teléfono propiamente tal. Mensajes de audio, fotos, archivos temporales de visualización única que no quedan almacenados en la memoria de los dispositivos y que los hace virtualmente irreconocibles como contenedores de droga, y son los desafíos que quienes trabajamos en la justicia penal, debemos sortear, con una actualización constante de las nuevas metodologías que avanzan a pasos agigantados, con una visión amplia que permita entender los modos cada vez más creativos, intrincados y tecnológicos de tráfico de drogas.*

*Por ejemplo, no se nos informó cómo se habían impregnado las hojas de un libro y su lomo con clorhidrato de cocaína sin dañarlo, para que siguiera pareciendo un inofensivo libro de cocina que podría haber confundido a cualquiera y que para averiguar su contenido de clorhidrato de cocaína requería de scanner que están en poder de la Policía de Investigaciones de Chile y no del ciudadano promedio, no están al alcance de la gente.*

*A su turno, la asociación ilícita se configura por la reunión de más de dos personas que se organizaron con el objeto de cometer el*

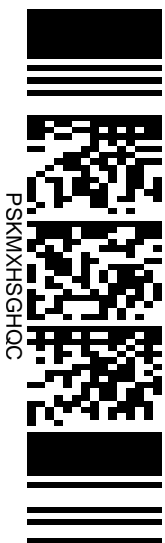


*delito de tráfico de drogas del artículo 3° en relación con el artículo ° de la Ley N° Esta organización se dio en el marco de una familia a cuya cabeza participaban por igual Mónica Soto Malig y Alfonso Godoy González. Esa particularidad de ser pareja y los cabecillas de la organización – en Chile – hace complejo establecer que uno tiene preeminencia sobre el otro, pues de las conversaciones y pruebas se colige que ellos no se mandan entre sí, no se dan órdenes, porque son pareja, son un equipo que está fuertemente asesorado y acompañado por Germán Soto Malig, hermano de Mónica quien por lo visto y oído en las pruebas se entiende perfectamente con su cuñado con quien tiene una buena relación.*

*La hija de Mónica, Rocío Gajardo Soto, estando plenamente al tanto de lo que su madre hacía, la apoya, la ayuda y además vive a sus expensas. Participación que no pudo sancionarse porque únicamente fue acusada en el auto de apertura, de haber cometido el delito de lavado de activos, porque su madre la mantenía y le pasaba dinero, pagando, además, el arriendo y el automóvil de la hija, sin considerar que la prueba efectivamente la vinculaba con la organización. El tercer hermano Nelson Soto Malig falleció, y los demás imputados están prófugos, Joan Ramos Borges desde antes del inicio de la segunda investigación en diciembre de 9 y Giovanni Zapata González desde una fecha y en circunstancias que no fueron claras para estos jueces.*

*Por último, el considerando duodécimo, relativo a la participación de Alfonso Godoy y Mónica Soto en el delito señala:*

*“Referente a la participación de Mónica Soto Malig y de Alfonso Godoy González en el delito de asociación ilícita para cometer tráfico de drogas, la conducta desplegada por ambos se enmarca en la*



descripción del artículo 16 N°1 de la Ley N°20.000 , también en calidad de autores del artículo 15 N°1 , puesto que ellos ejercían el mando y la dirección de la organización, lo que hacían de forma conjunta, porque además de ser cabecillas de la organización, son pareja, razón por la cual no existe predominancia de uno por sobre otro, pero si ambos realizaban actividades de dirección, de planificación, de estrategia de los envíos; por ejemplo cuando Mónica le dice a Alfonso que no pueden usar el nombre de la última que usaron, refiriéndose a que necesitaban un nuevo nombre para usar de remitente en el próximo envío de droga que hicieran, o cuando Alfonso le pide a Mónica que averigüe si las sucursales atienden, en qué horario y otros detalles para saber cómo harían los despachos de droga, considerando que estábamos en pandemia y que no todos los courrier funcionaban de forma normal.

Alfonso presume de tener un buen cocinero, alguien con vasta experiencia pateando droga, porque efectivamente trabajaba para él, lo que se demuestra cuando Giovanni le pide permiso para trabajar con otro grupo, o cuando se ponen de acuerdo con Giovanni para joder a Joan Ramos simulando una pérdida o quitada de droga para poder venderla ellos aparte. Mónica coordinaba detalles con Joan, no se supo por qué medio – a través de cuál red social o servicio de mensajería instantánea – pero eso es un detalle, puesto que la misma Mónica dice que le va a pedir plata a Joan para que financie el viaje a Iquique y luego de eso ella personalmente va a buscar un giro a Western Union, siendo la única vez que recibió dinero a su nombre. Alfonso organizaba quien recibiría en Chile los dineros que Mónica le pedía a Joan Ramos en el extranjero, usando para ello a su cuñado



(el fallecido Nelson Soto Malig) y a la hija de su pareja, Rocío Gajardo Soto.

*Por estos antecedentes y los elementos de cargo, se determinó que ambos compartían la dirección de esta agrupación, de forma conjunta.”*

**DÉCIMO QUINTO:** Los hechos así establecidos aparecen como inamovibles para este Tribunal, considerando que estamos frente a un recurso de derecho estricto y que lo que se alega por el recurrente es la infracción de ley, por lo que, construyéndose el recurso sobre la base de hechos no establecidos por el tribunal *a quo*, y que van en contra de estos, según se desprende claramente de lo expuesto en los considerandos transcritos, entregando los fundamentos que tuvo en consideración para estimar la existencia de una organización para cometer delitos contemplados en la ley 20.000, liderada por la acusada Mónica Soto y su pareja sentimental, conductas que no eran aisladas ni ocasionales, con una planificación al efecto, lo que se contrapone con la afirmación del defensor en cuanto a la no concurrencia de los elementos del tipo penal, en particular a la inexistencia de jerarquía, a la permanencia, las organización del plan y la finalidad, todos los cuales se dan por concurrentes en la especie, motivos por los cuales la causal en análisis no puede prosperar.

Así las cosas, desechadas ambas causales, el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de la condenada Mónica Soto Malig, debe ser rechazado.

### **III. Del recurso de nulidad de la defensa de Germán Soto Malig.**

**DÉCIMO SEXTO:** La causa principal del recurso deducido por la defensa de condenado Germán Soto, es la contemplada en el

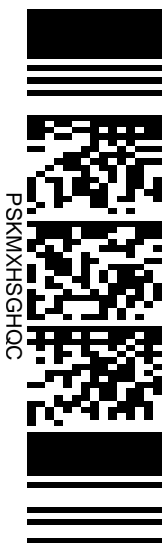


**artículo 374 letra e)** en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, aduciendo que la forma en que se acredita el hecho infringe el principio de razón suficiente.

Tras citar el considerando décimo del fallo impugnado, en aquella parte que se refiere a los hechos acreditados y al considerando undécimo, que califica jurídicamente dichos hechos como constitutivos del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de drogas y las normas que determinan la procedencia del recurso, pasa a señalar la forma en que la sentencia incurre en el motivo absoluto de nulidad, en atención a que a su juicio, las conclusiones a las que arriba la sentencia al momento de establecer la existencia del delito de asociación ilícita de la ley 20.000 por parte de su representado, se basa en una valoración de los medios de prueba que va en absoluta contradicción con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, específicamente el principio de razón suficiente.

Alega que en la valoración de la prueba de cargo que considera el tribunal para arribar a su decisión condenatoria, incurre en lo que se conoce en doctrina como “tergiversación de la prueba”, particularmente “tergiversación aditiva parcial”, al agregar o suponer determinados aspectos que no fueron incorporados por los funcionarios policiales en sus declaraciones ni por los audios de las escuchas telefónicas.

Así, y en absoluta contradicción a lo que aprecian los juzgadores, las pruebas presentadas en juicio oral sólo pueden dar cuenta de lo siguiente: i) Germán Soto no manipuló, trasladó, ni introdujo droga en ninguna de las cajas que permitieron el envío de la

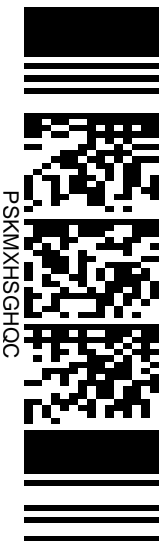


sustancia y, por lo tanto, malamente podía estar en posesión de ésta. ii) Germán Soto no acompañó a Alfonso Godoy y a Mónica Soto a la ciudad de Con-Con. iii) Germán Soto no le compró pasajes ni Alfonso Godoy ni Mónica Soto para viajar a Iquique o a algún otro destino, luego, pasa a analizar los distintos medios de prueba efectuando una valoración propia de ellos.

Concluye indicando que la conducta que fue acreditada por el tribunal es la elaboración de documentación falsa para que su hermana realizara estas conductas, que es la única acción que se pudo acreditar y que no existe prueba del resto de las conductas que se le atribuyen. Así, no hay razones suficientes para concluir como lo hizo el tribunal, cuando establece: *“y tomando parte en la ejecución del hecho, considerando que también poseyó la droga para poder guardarla en cajas y objetos de carácter neutral”*.

Como petición concreta con relación a la causal invocada solicita que, de acogerse, se anule el juicio oral y la sentencia, señalándose el estado en que debe quedar el proceso, ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, se reitera lo dicho en los considerandos noveno y décimo, a propósito de idéntica causal alegada por la defensa de Mónica Soto Malig, en relación a las exigencias legales de procedencia de este motivo de nulidad, que tampoco concurren en el recurso en análisis, por cuanto, por una parte, el recurrente no demuestra cómo se produce la infracción que denuncia, en el fondo solo se trata de una discrepancia valorativa y, por otra, se pudo apreciar que las conclusiones a las que se arriba en la sentencia son fruto de un análisis valorativo de cada uno de los elementos de prueba incorporados al juicio en relación con los

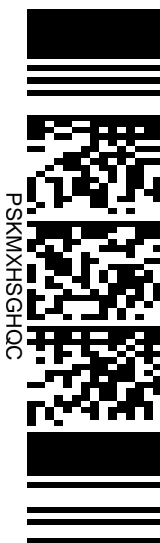




hechos que constituyen el tipo penal de asociación ilícita para traficar drogas y las acciones llevadas a cabo por los acusados. Por lo que no es posible considerar que el fallo impugnado carezca de coherencia y comprensión, como establece el artículo 342 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, la alegación de una supuesta deficiencia en el razonamiento no será aceptada.

**DÉCIMO OCTAVO:** Desestimada la causal principal, corresponde analizar la causal subsidiaria invocada por el recurrente, la contemplada en el **artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal**, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341 del mismo cuerpo legal, que consagra el principio de congruencia.

En cuanto a la forma en que se vulneraría este principio en el proceso, primero cita los hechos establecidos en la formalización y en el auto de apertura, y, a continuación, afirma que en la acusación se hace imputación respecto de cinco supuestos ilícitos que habrían ocurrido, en los cuales la participación del condenado Soto Malig, para configurar su participación respecto del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita, habría consistido exclusivamente en que éste supuestamente se habría encargado de realizar la documentación falsa para enviar la droga. Pero, en contravención a lo expuesto, para justificar su decisión de condena por ambos delitos, el tribunal *a quo*, en la sentencia, indica que “*Germán, tenía una labor secundaria de apoyo, entregando la logística para que estos envíos pudieran ser despachados*” y refiere las circunstancias en base a las cuales prueba dicha proposición, relativos a cinco pasajes en los que se establecen acciones que realizaba su representado, tales como encargarse de las cajas; confeccionar o



arreglar, o alistar las cajas que contenía la droga para enviar, o que comprar pasajes. A partir de tales afirmaciones estima que se verifica la vulneración denunciada dado que la única conducta imputada en la acusación dice relación con que Germán Soto Malig es la persona que se encarga de realizar la documentación falsa para enviar la droga.

Advierte que el Tribunal valora sin ninguna restricción los cinco supuestos fácticos enumerados, en donde se aprecia con absoluta claridad el exceso en la apreciación de las acciones que se le atribuyen a su representado, supuestos de los que, como además puede rápidamente advertirse, no tuvo oportunidad de defenderse, dado que la única oportunidad en la que tomó conocimiento de estas imputaciones fue al momento de conocer la sentencia condenatoria.

En cuanto a la influencia en lo dispositivo del fallo señala que, si el tribunal se hubiere remitido a considerar única y exclusivamente las proposiciones fácticas propuestas por el Ministerio Público, no hubiese podido fundamentar su decisión de condena, en lo que respecta a la participación de don Germán Soto Malig en el ilícito de Tráfico de Drogas y de Asociación Ilícita para traficar. En virtud de esto, pide que se anule el juicio oral y la sentencia, ordenándose un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado.

**DÉCIMO NOVENO:** Que la causal en análisis constituye un motivo absoluto de nulidad que procede *“Cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341”*. A su vez, el artículo 341 del Código Procesal Penal establece que *“Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella.”*



La excelentísima Corte Suprema ha sostenido que “la congruencia no es identidad gramatical, es una correspondencia entre los cargos y lo resolutivo del fallo que opera a favor de la defensa, para no ser condenado al margen de lo que postula la acusación, porque cuando ello ocurre la defensa queda inerte” (Corte Suprema Rol 6247-2014, de 12 de mayo de 2014).

*En ese orden de cosas, de la lectura de los sustratos fácticos de la acusación y de la sentencia no puede decirse que en el caso de autos estos límites hayan sido transgredidos, porque al tenor de lo dispuesto en los artículos 259 y 341 del Código Procesal Penal, es dable concluir que no existen diferencias que incidan directamente en la forma de comisión del ilícito y determinación de la participación en el mismo del hoy sentenciado, que hayan importado una vulneración al principio de congruencia o al legítimo ejercicio del derecho a defensa. Al efecto, se constata una perfecta coherencia y relación lógica en el fallo que no se aleja del hecho de su participación en la organización para cometer delitos de la ley 20.000, por lo que esta causal también será rechazada.*

**VIGÉSIMO:** Como última causal de nulidad, alega subsidiariamente, la prevista en el **artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, por errónea aplicación del derecho por infracción al artículo 16 N° 2 de la ley 20.000.

En cuanto a los hechos acreditados en la resolución impugnada, se remite al considerando décimo de dicho fallo, dándolos por reproducidos, así como el considerando undécimo, que establece la calificación jurídica de tales hechos como constitutivos del delito de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de drogas.

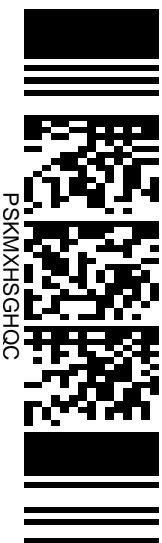


Luego cita los fundamentos del tribunal *a quo* respecto a cómo debe entenderse una asociación ilícita para el tráfico de drogas y los requisitos del tipo, citando al efecto el considerando séptimo de la sentencia.

Sostiene que en el fallo no hay ningún hecho acreditado que dé cuenta de la existencia de reglas propias y de la disciplina a la que debían estar sujetos sus miembros de acuerdo con los términos que requiere la existencia del crimen organizado. Agrega que tampoco se pudo acreditar que haya habido sanciones aplicadas o amenazas de aplicarlas, ni se incautaron armas a los imputados, dice que usaron el mismo teléfono celular durante todo el tiempo que fueron seguidos, que nunca pusieron en riesgo o vulneraron algún bien jurídico tutelado por la norma, puesto que la actividad (familiar) en ningún momento desafió el legítimo ejercicio de la fuerza por parte del estado.

Concluye diciendo que todo lo anterior es fundamental, ya que el ente persecutor no exhibió prueba para acreditar que esta familia constituía una empresa criminal, o crimen organizado, pues más allá de las conductas desplegadas por los coimputados, nunca se constató que existiera entre sus miembros un “nosotros” con identidad distinta e independiente de cada uno de sus integrantes, e incluso, que los distinguiera de la naturaleza y espíritu de sus propias relaciones filiales.

Como petición concreta de la causal invocada, pide que esta se acoja y se proceda a anular sólo la sentencia, por concurrir los errores señalados en la aplicación del derecho, y se dicte sentencia de reemplazo que se conformare a la ley y, en definitiva, absuelva a

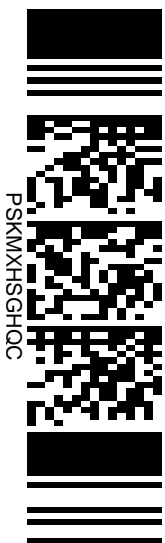


su representado del delito de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de drogas.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que la alegación efectuada en este motivo de nulidad ya fue analizada a propósito del recurso de nulidad de la acusada Mónica Soto, que denuncia error en la aplicación de la misma norma legal, por lo que es pertinente reiterar lo dicho en el considerando undécimo y siguientes de esta sentencia.

Cabe agregar lo establecido en considerando duodécimo del fallo a propósito de la determinación de la participación de Germán Soto Malig en el delito de asociación ilícita para cometer tráfico de drogas, en el siguiente tenor: *“En tanto que, la participación de Germán Soto Malig en el delito de asociación ilícita para cometer tráfico de drogas, se enmarcó en el artículo 16 N°2 de la Ley N° 20.000 porque el suministró colaboración para la consecución de los fines de la organización que era la importación y exportación de droga. La ayuda que prestó Germán Soto Malig – existiendo concierto y plena conciencia de lo que estaba haciendo, pues se colige claramente de las interceptaciones telefónicas que era parte de la organización dedicada al tráfico de drogas – no solo aconsejaba a su hermana en cuanto a los dineros que recibía, a que cobrara por su trabajo, sino que además los ayudaba proporcionándoles los elementos para materializar el tráfico de drogas. La participación específica que se le atribuye a Germán Soto Malig es de autor del delito de asociación ilícita contenido en el artículo 16 N°2 de la Ley 20.000, autor directo como lo establece la clasificación del artículo 15 N° 1 del Código Penal.”*

Además, el motivo de nulidad que se analiza ahora contiene el mismo defecto en que incurre la defensa de la condenada Mónica



Soto, en cuanto el recurrente efectúa un análisis de la norma sobre la base de presupuestos de hecho diversos a aquellos establecidos en el fallo recurrido, por lo que no puede prosperar, toda vez que, como se dijo, estos hechos son inamovibles para esta Corte, por lo que no es posible efectuar el análisis que pretende el recurrente, sin riesgo de vulnerar el principio de inmediación, motivos por los cuales no cabe sino desestimar esta causal de nulidad y, por consiguiente, el recurso en su totalidad.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de los condenados Alfonso Alberto Godoy González, Mónica de Lourdes Soto Malig y Germán Alfredo Soto Malig, en contra de la sentencia de treinta de junio del año en curso, dictada por el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en la causa RUC 2000175446-8, RIT 158-2022, la que, en consecuencia, no es nula, como tampoco lo es el juicio que la antecedió.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**Redacción de la abogada integrante Magaly Correa Farías.**

**N°Penal-3596-2023.**

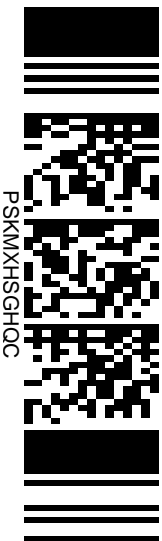
No firma la ministra señora Merino, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse con licencia médica.





Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z. y Abogada Integrante Magaly Carolina Correa F. Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.

En Santiago, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>